Impreso por Fernando Gómez . Prohibida su reproducción.

JOSEP A. DURAN I LLEIDA
Presidente del Comité de Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya

La responsabilidad de una decisión

Apesar de no resultar siempre necesario o de que, en ocasiones, no sea suficiente, once años de mayoría absoluta han generado en la opinión española la idea de que un Gobierno estable es sólo aquél que lo integran unos partidos que disponen de la mitad más uno de los votos de las Cámaras. Así, tras los resultados del 6 de junio, muchos han sido quienes se han entregado a toda suerte de cábalas en busca de la mítica cifra de 176 diputados. Con dichas premisas y en tales combinaciones, añadir a los escaños socialistas los 17 votos de CiU y los 5 del PNV comportaba, sin duda, un resultado apetecible. Durante semanas, pues, se ha especulado con un Gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas.

Sin embargo, pocos comentaristas han percibido las notorias diferencias de planteamientos existentes entre los partidos nacionalistas y el supuesto socio mayoritario socialista. Todo el mundo ha considerado que la coalición debería consistir en un reparto más o menos proporcional de ministerios y se ha olvidado de que, en general, cualquier Gobierno de coalición exige previamente un programa o unos objetivos comunes. Si no es así, es absurdo proponer la participación en un Gobierno sin haber trabajado a fondo y con anterioridad en el programa común. En consecuencia, era obligado rechazar la invitación socialista que no ha sido otra cosa que una adhesión al proyecto personal de Felipe González.

INESTABILIDAD POLITICA.– Con motivo de dicha negativa, se ha querido acusar a la coalición de CiU de no contribuir a la gobernabilidad del Estado, e incluso de fomentar la inestabilidad. La considero una acusación notoriamente injusta. Primero porque quien provoca la actual inestabilidad política y económica es el PSOE y no nosotros. Y segundo, porque desde 1977 la coalición de CiU ha apoyado con su voto todas aquellas iniciativas de democratización y modernidad del Estado, renunciando a planteamientos legítimos en pro de una transición y consolidación de la democracia. Así lo hicimos con un Gobierno de UCD, mientras en el PSOE primaba el interés partidista sobre el del Estado. Y así lo hemos hecho con el PSOE, y nuestra actitud ante la huelga general del 88 es sólo uno, aunque notorio, de los ejemplos.

Esta contribución catalana a la gobernabilidad y a la estabilidad, pocas veces se ha visto correspondida desde otro extremo con una asunción de la pluralidad nacional, lingüística y cultural de España. Piénsese en normas como la LOAPA, con la que se inauguró el Gobierno del PSOE, pero se despidió también el de UCD, o en la catarata de recursos que la Administración central promueve contra las leyes autonómicas ante el Tribunal Constitucional. Si el Partido Socialista tiene dificultades en asumir el hecho autonómico, es normal que los partidos nacionalistas se sientan incómodos ante cualquier posibilidad de coalición. Así pues, entre las cuestiones en las que conviene profundizar antes de entrar a formar parte de cualquier Gobierno, se halla, sin duda alguna, la normalización y consolidación de la realidad plural de España, que, entre muchas cosas, debe garantizar, de una vez por todas, la anulación de la actual duplicidad administrativa. Desde que con la Constitución del 78 España configuró un Estado de las Autonomías, se han consolidado dos estados, dos administraciones: el central, que no ha desaparecido, y el autonómico. Duplicidad que tiene su proyección en el alarmante déficit público del Estado y en la carencia de la necesaria eficacia en la resolución de los trámites administrativos. Qué oportunidad perdida en este sentido supone inaugurar un nuevo Gobierno manteniendo un innecesario ministro de Cultura o de Turismo, o tantas y tantas direcciones generales que pretenden entender de materias que son hoy competencia de las CCAA y no del Gobierno central.

> Era obligado rechazar la invitación socialista que no ha sido otra cosa que una adhesión al proyecto personal de Felipe González

Otro apartado que conviene debatir en profundidad es la política económica que debe adoptar el Gobierno ante una determinada situación de la que es responsable el Gobierno socialista y no nosotros. Desde UDC no nos cansaremos de reivindicar una política que fomente la economía productiva, que impulse el ahorro privado y modere el déficit público. Una política que garantice el diálogo social pero que aborde también, sin dilación alguna, la reforma del mercado laboral y que, en cualquier caso, no hipoteque aquello que es necesario hacer. En síntesis, se trata de que la política económica pueda coadyuvar a una mayor competitividad de nuestras empresas y a su renovación tecnológica. Ese y no otro es el reto del PSOE, incumplido por cierto, desde la convocatoria electoral anticipada del 89. Todo ello sin olvidar algo muy importante: no se puede mantener la que ya se ha denominado una «cultura del subsidio» ante la necesidad de adoptar el valor trabajo como requisito imprescindible para la superación de la crisis. Si no se sabe, debería ya tomarse buena nota de que la cultura del subsidio no tiene cabida en el proyecto europeo.

Una acción conjunta de Gobierno requiere también un decidido impulso al proceso democrático y a la dignificación de la vida pública; a tal efecto, conviene regular con firmeza la financiación de los partidos políticos y aumentar la intervención de los ciudadanos en la elección de sus representantes mediante la posibilidad de listas abiertas.

COMO GOBERNAR.– Entendemos que no se puede formar parte de un gobierno sin concretar antes cómo se ha de gobernar y para qué. Es legítimo y resulta natural que Unión Democràtica, al igual que los otros partidos llamados, quiera concretar antes las líneas directrices de la acción de Gobierno, porque eso es mucho más importante que el número de ministerios o las áreas de actuación confiadas.

La negativa a participar no supone pues una falta de responsabilidad, sino, al contrario, un claro ejercicio de responsabilidad política y de coherencia. Y esta seriedad y coherencia ha de ser exigida también al Partido Socialistas, el cual, no lo olvidemos, es el principal responsable de la actual situación española; sería aconsejable, pues, que, en los próximos meses, el Partido Socialista demostrase cuál es su programa de Gobierno y que, en política económica, lo hiciera de forma inmediata, adoptando, desde ahora mismo, medidas urgentes. De no hacerlo así, los Presupuestos Generales del 94, aun en el supuesto de contenerlas, no encontrarán otra cosa que un desierto industrial. Como resulta igualmente necesario que proceda a zanjar los conflictos internos que forzaron a la disolución de las Cámaras y que, por el momento, no parece haber sabido resolver.

Por nuestra parte, la votación favorable a la investidura ya ha demostrado, con creces, una vez más, nuestra disposición a colaborar en la gobernabilidad del Estado y a dar continuidad a una política constructiva de la que somos protagonistas desde el inicio de la transición. Pero si no se nos garantiza lealtad, seriedad y diálogo y un mínimo de objetivos políticos comunes, difícilmente podremos ir más allá de donde estamos.

CONTRA LA CONFUSION

El fracaso del fracaso

ANTONIO GARCIA-TREVIJANO

EL supremo ideal de la humanidad está fuera de su alcance. Ni la más portentosa de nuestras facultades, ese pequeño reactor de masa gris que nos hace viajar a velocidades superiores a la de la luz y violar con éxito las leyes de los cuerpos, ha podido imaginar un modo de producción de la existencia social comparable al modo «divino» de producir el orden del Universo y de la Vida. Los organismos inferiores logran realizar sin libertad la armonía que el espíritu ensaya inútilmente de alcanzar con ella. Sólo la geometría y la mística, antes de que se curvara el espacio y se retorciera el subconsciente, parecían responder a esa necesidad humana de vivir la plenitud. La incapacidad de la libertad para alcanzar la eficiencia de la necesidad constituye el enigma al que responden la religión y la ciencia. La primera, revelando la naturaleza caída de la libertad, conserva la validez del modelo: «Errar es de humanos». La segunda, al descubrir la base caótica de la necesidad, destruye el mito del orden natural. La libertad, en su ínfimo campo de experiencia, alcanza mayor eficiencia que la universal necesidad: «Errar es de la Naturaleza». La maravilla del Universo es simple. Su belleza la ponemos nosotros. Su orden perfecto es obra de un presuntuoso contable que borra las huellas de los fracasos para que sólo conste, en el libro del mundo, el registro de sus éxitos.

• • •

Esta contabilidad de «haber sin debe» —que se reproduce al parecer durante nuestro sueño orbital, para sedar las sensaciones de frustración diurna— reconstituye el orden político sobre la absurda creencia de que todo lo real es racional. El fracaso del poder no cabe en el sistema. Cuando no se puede disimular, entra en juego un ciego mecanismo social que lo borra con un extraño sentimiento de «magnanimidad», como el del esclavo que comprende las equivocaciones y compadece las tribulaciones de su amo. El poder político no tiene éxitos o fracasos, ni se juzga por ellos. Es, en sí mismo, un puro triunfo de la realidad. Y no admite más fracaso que el de su derrota. Si la oposición es real, el orden político no puede borrar de la representación de la existencia, como el vanidoso contable de la Naturaleza, el rastro de las catástrofes que los gobernantes engendran. Los defectos y fallos del poder político no son imputables a quien lo tiene, sino a la oposición incapaz de destruir la reputación que lo sostiene. Y el pueblo borra, con goma bendita, las huellas de los crímenes y de los fracasos del poder. Tarea más fácil para la educación católica (errar es de humanos) que para la puritana reputación de las buenas obras (errar es de condenados). El colmo de la perfección se alcanza cuando el fracaso se constituye en fuente de renovación del poder, en su especial atractivo.

• • •

Sobre fracasos evidentes, como la participación entusiasta en la guerra de Bosnia y en el Sistema Monetario Europeo, se construye en España la reputación de un gobierno «moderno y progresista». El poder político se consolida, como las viejas ciudades, sobre las ruinas de sus anteriores fracasos. El elector se inclina con sumo gusto ante personas expertas en yerros y en mudanzas de opinión. Entre una gran capacidad para equivocarse a corto plazo y una previsión de gobierno de largo alcance, el pueblo se identifica con lo más parecido a su modo efímero de vida. El prestigio del poder no se labra en el campo de las competencias profesionales y tiene poco que ver con el resultado de su gestión. Fue motivo de extrañeza que Churchil, artífice de la resistencia contra el nazismo, saliera derrotado de las urnas por un oscuro funcionario del laborismo. Pero no lo es que el rudo artesano de una cruel catástrofe económica salga reelegido en España. Y lo enigmático no está en el resultado (explicable por la falta de alternativa), sino en su justificación social: el vínculo que se establece entre el fracaso del poder y la necesidad moral de redimirlo para darle otra oportunidad de volver a equivocarse. El gobernante lava entonces su culpa permitiendo que se borren las huellas de sus fracasos, haciendo que lo público y el público sólo registren sus éxitos de imagen. Y como la de triunfador no encaja en el triste déficit de la realidad, adopta la poco honorable del gestor que se procura un margen de confianza con el «borrón y cuenta nueva», con el cambio sobre el cambio. Que es, y está a la vista, otro fracaso sobre el fracaso. Es decir, un éxito.